

REPÚBLICA DE PANAMÁ



Vista Número 549

MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN

Panamá, 21 de julio de 2020

**Proceso Contencioso
Administrativo de
Plena Jurisdicción.**

La Licenciada Doris Elizabeth Patiño Martínez, actuando en nombre y representación de **Aura Enilda Grisales Franco** solicita que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal 351 de 2 de agosto de 2019, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del **Servicio Nacional de Migración**, su acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

**Recurso de Apelación
(Promoción y Sustentación).**

Honorable Magistrado Presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia.

Acudo ante usted conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Código Judicial, en concordancia con lo establecido en los artículos 1132 y 1147 del mismo cuerpo normativo, para promover y sustentar recurso de apelación en contra de la Providencia de 17 de febrero de 2020, visible a foja 59 del expediente judicial, mediante la cual se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción; solicitando al Tribunal que, conforme el criterio utilizado al proferir su Resolución de 1 de diciembre de 2009, se conceda este recurso en el efecto suspensivo.

1. La demandante no cumple a cabalidad con el requisito de admisibilidad previsto en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943.

La oposición de la Procuraduría de la Administración a la admisión de la demanda se fundamenta en que la **recurrente no cumple en debida forma con el presupuesto procesal dispuesto en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943**, modificado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, que se refiere a

“**lo que se demanda**”; en concordancia con el artículo 43a de la Ley 135 de 1943, adicionado por el artículo 29 de la Ley 33 de 1946, los cuales son del tenor siguiente:

“**Artículo 43:** Toda demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contendrá:

...

2. **Lo que se demanda.**” (Lo destacado es nuestro).

“**Artículo 43a.** Si la acción intentada es la de nulidad de un acto administrativo, se individualizará éste con toda precisión; y **si se demanda el restablecimiento de un derecho, deberán indicarse las prestaciones que se pretenden**, ya se trate de indemnizaciones o de modificación o reforma del acto demandado o del hecho u operación administrativa que causa la demanda.

...” (La negrita es nuestra).

Al revisar el apartado de la acción **reservado expresamente para indicar lo que se demanda**, la actora peticiona lo siguiente:

“**II. LO QUE SE DEMANDA:**

...

5. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, esta Honorable Sala declare que nuestra representada tiene derecho a que se le reconozcan todas sus prestaciones laborales y salariales dejadas de percibir hasta el momento de su reintegro, como consecuencia de los actos administrativos demandados.” (Cfr. foja 5 del expediente judicial).

En ese sentido, esta Procuraduría advierte que la pretensión en la acción objeto de estudio, versa sobre el reconocimiento de un monto económico; no obstante, al efectuar una lectura del apartado de “**II. LO QUE SE DEMANDA**”, la actora **no indica cuánto es el monto que considera le asiste respecto a dichos supuestos derechos, pretermisión que deviene en un error en la estructuración de la demanda**, puesto que tal, como se desprende de la disposición normativa citada en párrafos precedentes, es deber del titular litigioso **señalar las prestaciones que se pretenden**, en este caso, **al ser de índole**

pecuniaria, delimitar expresamente la cuantía que considera le debe ser remunerado.

Al respecto, debemos precisar que el incumplimiento del presupuesto procesal en referencia acarrearía una desventaja procesal para la entidad demandada, ya que **se le estaría cercenando la oportunidad de someter al contradictorio la pretensión de la accionante al verse imposibilitada de rebatir, oportunamente, la cuantía a pagar en caso que el Tribunal acceda a lo solicitado por la recurrente;** de ahí la importancia que quien ejerza la vía deba probar su derecho no solo dentro del marco regulatorio; sino también, cuantificando el monto del derecho que considera le asiste; de lo contrario, estaríamos sometidos al escrutinio del activador judicial.

En este contexto, se pronunció la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en el Auto de 3 de junio de 2010, que en lo pertinente indica:

“ ...

Como ha podido verse, parte de la controversia que debe dilucidar el resto de la Sala guarda relación con el artículo 43a de la Ley 135 de 1943, cuyo texto se transcribe para mayor ilustración:

‘ARTÍCULO 43a. Si la acción intentada es la de nulidad de un acto administrativo, se individualizará éste con toda precisión; y si se demanda el restablecimiento de un derecho, deberán indicarse las prestaciones que se pretenden, ya se trate de indemnizaciones o de modificación o reforma del acto demandado o del hecho u operación administrativa que causa la demanda.’

Resalta el Resto de la Sala

De la lectura de la norma transcrita se infiere claramente que en aquellos casos en que el actor procura el restablecimiento de algún derecho subjetivo que considera violado, lo que sólo es viable en las acciones de plena jurisdicción, **es indispensable que indique o señale cuáles son las ‘prestaciones’ que pretende con su demanda.** El cumplimiento de este requisito resulta esencial en la medida en que la declaratoria de nulidad del acto administrativo impugnado no conlleva la reparación automática del

derecho subjetivo que el afectado estima violado. Respecto al cumplimiento de este requisito, este tribunal ha manifestado en innumerables ocasiones que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo, no conlleva la reparación del derecho subjetivo per se. **Es decir, la declaratoria de nulidad de un acto, no implica la restitución del derecho particular violado o la correspondiente prestación. Ello explica por qué, a manera de ejemplo, en el caso de la destitución de un servidor público, que es el caso que nos ocupa, debe pedirse también el reintegro y el pago de los salarios caídos, si a ellos tuviere derecho; o la adjudicación del acto público, cuando se demanda la nulidad de la resolución que adjudicó la respectiva licitación pública; o la cancelación de determinada suma de dinero, conjuntamente con el acto que negó el pago a favor del afectado.**" (La subraya es de la Sala y lo resaltado corresponda a este Despacho).

Así las cosas, del precedente jurisprudencial reproducido, se infiere que como quiera que el objeto de la presente acción contiene el reconocimiento o no, de una cuantía económica, **ello lleva intrínseco el pago de una suma de dinero determinada, monto que debe ser debidamente identificado por la accionante por constituir éste parte del objeto de lo que se demanda**, presupuesto procesal que no fue cumplido a cabalidad por la hoy recurrente en la acción ensayada.

Todo lo anterior sin perjuicio, de que el propio acto demandado ordenó, en ese mismo acto, que se le reconociera a la demandante todas las prestaciones que por ley le correspondían (Cfr. foja 24 del expediente judicial).

Por otro lado, cuando analizamos el contenido de las pretensiones identificadas en los numerales 3 y 4, observamos que a través de una misma demanda, la actora pretende que la Sala Tercera se pronuncie en relación a dos actos administrativos distintos, a saber, la **Resolución 322 de 22 de julio de 2019**, confirmada por la **Resolución 356 de 1 de agosto de 2019**, mediante la cual se dejó sin efecto la incorporación a la Carrera Migratoria de la demandante;

y por otro lado, la **Resolución 351 de 2 de agosto de 2019**, objeto de reparo, a través del cual se dejó sin efecto su nombramiento, veamos:

“3. Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores, esta Honorable Sala declare que se mantiene vigente el Decreto 168 del 20 de mayo de 2015, que le confirió el nombramiento a AURA ENILDA GRISALES FRANCO en el cargo de Supervisor de Migración III, con Código 8032130, Posición 1315, Salario Mensual de B/.2,500.00 con cargo a la Partida G.001820401.001.001.

4. Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores esta Honorable Sala declare el reintegro de AURA ENILDA GRISALES FRANCO **como servidora pública en Carrera Migratoria en el Servicio Nacional de Migración** en la misma posición, salario y condiciones laborales que mantenía al momento de dictarse el Decreto 351 de 02 de agosto de 2019 y su acto confirmatorio.” (El resaltado es nuestro) (Cfr. fojas 4 – 5 del expediente judicial).

El acto cuya legalidad se cuestiona, se limita a dejar sin efecto el nombramiento de la demandante, y no se pronuncia en cuanto a ningún otro elemento derivado de la relación laboral; motivo por el cual, solicitar que a través de la presente acción, se realicen pronunciamientos en cuanto a situaciones que se dieron de manera previa a su desvinculación, resulta jurídicamente improcedente; puesto que, en una misma cuerda se estarían ateniendo o analizado distintos actos administrativos.

En atención a las consideraciones antes expuestas, cobra relevancia el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 50. No se dará curso a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades, y su presentación no interrumpe los términos señalados para la prescripción de la acción” (El resaltado es nuestro).

Tal como se desprende del artículo arriba citado, ante la omisión de alguna de las formalidades, el Tribunal no deberá dar curso a la demanda que ante ellos haya sido presentada; motivo por el cual, solicitamos, atendiendo a lo ahí establecido, que se proceda de conformidad a lo que el propio artículo dispone.

Finalmente, solicitamos que al momento en que se decida esta apelación se tenga en cuenta que, conforme lo ha indicado esa Alta Corporación de Justicia a través de reiterada jurisprudencia, una cosa es la Tutela Judicial Efectiva y otra cosa el deber que tiene toda persona que acuda ante la jurisdicción Contencioso Administrativa en auxilio de sus derechos subjetivos, de cumplir con los requisitos básicos y mínimos que la norma procesal establece (Cfr. Auto de 23 de junio de 2010).

Sobre la base del criterio antes expuesto, consideramos procedente solicitar al Tribunal la aplicación de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 31 de la Ley 33 de 1946 y, que en consecuencia, se **revoque la Providencia de 17 de febrero de 2020**, visible a foja 59 del expediente judicial, que admite la presente demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción y, en su lugar, **NO SE ADMITA** la misma.

Del Honorable Magistrado Presidente,



Rigoberto González Montenegro
Procurador de la Administración



Mónica I. Castillo Arjona
Secretaria General

Expediente 1107-19